



Proyecto Conga: Se admite demanda de inconstitucionalidad contra ordenanza que lo prohíbe

El Pleno del Tribunal Constitucional resolvió admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad recaída en el Exp. N° 001-2012-PT/TC interpuesta por el Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales contra la Ordenanza Regional N° 036-2011-GR, CAJCR de Cajamarca por infringir los artículos 189°, 190°, 191° y otros de la Constitución.

La Resolución señala que la demanda ha sido interpuesta por el Fiscal de la Nación, dentro del plazo establecido en el artículo 100° del Código Procesal Constitucional y cumple con todos los requisitos y recaudos establecidos en el artículo 101° y 102° del Código mencionado, por lo que debe ser admitida.

Al mismo tiempo, el Tribunal dispuso correr traslado de la demanda al Gobierno Regional de Cajamarca para que en un plazo de 30 días conteste la demanda, conforme lo dispone el artículo 107° del Código Procesal Constitucional.

Por otro lado, el Fiscal de la Nación se encuentra legitimado para interponer demanda de inconstitucionalidad conforme lo establece la Constitución así como el segundo párrafo del artículo 99° del Código Procesal Constitucional.



Sabías que...

Según el artículo 107° del Código Procesal Constitucional, el Tribunal Constitucional transcurrido el plazo para contestar la demanda de inconstitucionalidad señala fecha para la vista de la causa dentro de los diez días útiles siguientes.

En el artículo 108° se establece que el Tribunal dicta sentencia dentro de los treinta días posteriores de producida la vista de la causa.

COLUMNA DEL DIRECTOR:

Desarrollo, minería y medio ambiente

Página 2

INFORMACIÓN CONSTITUCIONAL

Admite a trámite demanda de inconstitucionalidad contra la Ley que modifica algunos artículos del Código Penal

Página 3

Desestiman pedido de Eduardo Calumel del Salar para que se anulen órdenes de captura nacional e internacional dictadas en su contra

Página 4

Para ejercer la profesión de químico farmacéutico solo es necesario estar inscrito en el colegio nacional o departamental

Página 6

Rechazan pedido de información sobre extradición de ex presidente Fujimori por contener información confidencial

Página 6

INSTITUCIONAL

Se presenta video del coloquio "El Nuevo Código Procesal Penal ante la Jurisdicción del Tribunal Constitucional"

Página 7

Magistrados Ernesto Álvarez Miranda y Oscar Urviola Han juramentaron como presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional

Página 8

Proyecto Majes Siguan II: Obras se ejecutarán cuando se realice el estudio de balance hídrico integral

El Tribunal Constitucional aclaró que en tanto del 8 de noviembre del 2011 y no retardar dicha ejecución no se realice el denominado "Estudio Técnico mediante el uso de mecanismos jurídicos, políticos o de Balance Hídrico Integral", no se puede iniciar, ejecutar o desarrollar obras en el proyecto Majes Siguan II, salvo aquellas que sean necesarias para la realización del expediente técnico y de ingeniería, así como para el Estudio Técnico de Balance Hídrico Integral ordenado. Así lo precisó al resolver los pedidos de aclaración de la sentencia emitida por este Alto Tribunal.

Respecto del punto relacionado con la interrogante sobre cuál es el ámbito geográfico sobre el que debe desarrollarse el estudio de balance hídrico, cabe recordar que el fundamento 44 de la sentencia establece que el plazo, condiciones y financiamiento de dicho balance, será realizado por iniciativa de las tres partes: Gobierno Nacional, Gobierno Regional de Cusco y Gobierno Regional de Arequipa, conforme al amoldado fundamento. Dentro de las condiciones del balance hídrico, se encuentra entre otros asuntos, el vinculado al ámbito geográfico que abarcará el estudio. Luego de precisar las otras consideraciones, el Tribunal Constitucional dispuso a tener por aclarada la sentencia de conformidad con sus fundamentos.

El Tribunal indicó que el punto antes señalado contiene argumentos precisos y suficientes por lo que se exhorta a las autoridades, representantes y ciudadanos de los departamentos de Cusco y Arequipa, a coadyuvar en la efectiva realización del estudio ordenado en la sentencia.



REPERCUSIONES

El jefe de la Unidad de Conflictos del Gobierno Regional de Arequipa, Berly Gonzales, señaló que están conformes con la resolución de aclaración emitida por el Tribunal Constitucional, sobre el proyecto Majes Siguan II, solicitada por el Gobierno Regional de Cusco. Agregó que no iniciar obras físicas, como vías campestres, en tanto no se culmine el Estudio de Balance Hídrico ordenado por la máxima instancia constitucional.

Dijo que el tiempo que duren los estudios será precisado en la próxima reunión que sostendrán los presidentes regionales con el mandatario Ollanta Humala.

El director del Plan Meris del Gobierno Regional del Cusco, Efraín Silva Canal, manifestó que el Tribunal Constitucional adoptó los reclamos de la región e hizo prevalecer el estudio de impacto ambiental antes que se realice el proyecto Majes Siguan en el Cañón del Apurímac.

"Esta resolución del TC lo que hace es confirmar lo que en los últimos años se ha venido trabajando. Primero, que se haga un estudio de balance hídrico integral serio, detallado y con base científica, y además que esta sea una condición indispensable del proyecto Majes Siguan II. El Tribunal ha acogido nuestra sugerencia, pedido y lucha, y eso es positivo", dijo Silva.

Columna del director

Carlos Mesía



Desarrollo, minería y medio ambiente

El Tribunal Constitucional tiene ahora la gran responsabilidad de resolver la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales en contra de la ordenanza del Gobierno Regional de Cajamarca que declara inviable el proyecto minero Congo.

No cabe duda que el caso Congo representa para este alto Tribunal un tema complejo y delicado.

Este proceso es el que están enfrentados el gobierno regional de Cajamarca y el Gobierno Nacional servirá para que el TC pueda dar un mensaje al país desde la perspectiva del derecho que se pueda conjugar el desarrollo y el medio ambiente.

Es innegable que la discusión está centrada en la necesidad nacional del desarrollo y crecimiento y por otro la necesidad de defender el medio ambiente, pero sobre todo de garantizar que ninguna de las comunidades resulte afectada cuando se trata de proyectos de desarrollo.

Asimismo, debe servir para que los gobiernos regionales y locales puedan sintonizar con los proyectos de desarrollo y demostrar la eficiencia que demandan los pobladores, porque tal como se ha informado en algunos casos se ha dado una inapropiada de gestión. Para eso los ingresos que reciben por canon y otros deben constituirse en todo un reto para las autoridades regionales y locales, con lo cual podría cumplirse poco a poco el gran anhelo de la veracidad y efectiva descentralización.

Por otro lado, el reto de la minería debe centrarse en demostrar que todo el trabajo que desarrolla en los pueblos donde llega, debe redundar en más carreteras, más puentes, colegios, universidades, servicios básicos, entre otros.

El Tribunal ya admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad contra la Ordenanza 036-2011-GR-CAJ, porque supuestamente infringe los artículos 189, 190, 191 y otros de la Constitución. Ahora está corriendo el plazo de 30 días para que el Gobierno Regional de Cajamarca conteste la demanda. Siendo así el TC deberá fijar fecha para la audiencia que de todas maneras será en la ciudad de Arequipa, en virtud al acuerdo adoptado por el pleno del TC de que todos los procesos de inconstitucionalidad se vean en la sede de la Ciudad Blanca.

Acuerdo del CNM que no nombró a postulante como fiscal supremo pese a haber alcanzado el primer lugar fue declarado nulo

El Tribunal Constitucional declaró nulo el acuerdo del Consejo Nacional de la Magistratura que decidió no nombrar en el cargo de fiscal supremo al postulante César Hinostroza Parichá, pese haber alcanzado el primer lugar en el concurso convocados y ordenó emitir un nuevo acuerdo debidamente motivado, lo que supone, que sus miembros previamente vuelvan a votar su decisión.

Así lo dispuso en la sentencia recaída en el expediente N° 03891-2011-PATC que declaró fundada la demanda de amparo por haberse acreditado la violación de los derechos al debido proceso y la motivación de las resoluciones. El Tribunal encuentra que en el examen escrito el demandante obtuvo la mayor nota de los postulantes entre para plaza de jueces como fiscales supremos, con una nota final de 96 puntos sobre 100, 90 puntos en la calificación curricular y 82.5 puntos en la entrevista personal.

En el caso concreto y atendiendo a las consideraciones expuestas en sus fundamentos, para el Tribunal Constitucional queda claro que aunque la entidad demandada haya cumplido con motivar y suscribir las razones por las cuales decidió no nombrar al demandante en el cargo al que postulaba, no se advierte que ésta haya sido ejercida de una forma eficiente o sólida, conforme lo impone la Constitución, sino de manera arbitraria.

A juicio del tribunal resulta fuera de toda duda que se violó el derecho a una decisión debidamente motivada por no haberse motivado en solo aparente. Si bien es cierto que sustentan la decisión, así como expresan al amparo de qué norma legal se expide el acto administrativo, sin



embargo solo intentan dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico.

Efectivamente, si bien la mayoría de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura motivan y expresan las razones que los conllevan a tomar determinada decisión, esto es, la de no nombrar al demandante debido a los cuestionamientos de parte de determinados medios de comunicación, sin embargo se advierte que el acuerdo cuestionado, si bien se emitió al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida, resulta arbitrario por cuanto carece de justificaciones objetivas que, por lo demás, debió prevenir de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso de evaluación materia del concurso público al que postuló el demandante.

Ordenan a la Corte Suprema resolver en el plazo de 120 días el recurso de nulidad de la sentencia interpuesto por Jorge Camet

Por haberse acreditado la vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de habeas corpus contenida en el expediente N° 04144-PHC/TC, interpuesta por Jorge Camet Dickman, contra la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República, disponiendo que en el plazo de 120 días naturales, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema -sin cuando está en origen el agravio-, cumpla con resolver el recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia recaída en el expediente N° A.V.27-2003.



El Colegiado precisa que el artículo 131° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece, entre otras consideraciones que maltratan de autos, quejas de derecho, contiendas de competencia, procesos sobre alimentos, hábeas corpus, acción de amparo con o sin en cárcel, o que estén por prescribir, la vista de la causa tendrá lugar dentro del quinto día de hallarse sesionados. En todo caso, deben resolverse en un plazo máximo de tres meses calendario, sin perjuicio de la normatividad procesal que señala un plazo menor, especialmente en las acciones de garantía.

El Tribunal señala que no obstante, poco después de interpuso y concedido el recurso de agravio la Sala emplazada dictó sentencia de primera instancia, ello no genera que la vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable haya desaparecido o cesado, por cuanto el recurso de nulidad interpuesto contra dicha sentencia hasta la fecha no ha sido resuelto, a pesar que fue concedido y elevando inmediatamente a la Sala Penal transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.

sin perjuicio de la normatividad procesal que señala un plazo menor, especialmente en las acciones de garantía.

En el presente caso, resulta evidente que desde la fecha de concesión del recurso de nulidad hasta el momento, ha transcurrido en exceso el plazo de tres meses calendario, sin que se reanuncie el precitado recurso, pues por más de ocho años el demandante se ha encontrado en una situación jurídica indefinida. Además, el ámbito competencial del recurso de nulidad no conlleva la renovación de la actividad probatoria, ni posibilita actuar medios probatorios que no se actuaron en primera instancia.

Ordenan reponer a tripulante de American Airlines al no haberse acreditado el despido fraudulento

Bajo apercibimiento de imponerle las medidas coercitivas previstas en el Código Procesal Constitucional, el Tribunal Constitucional ordenó a la empresa American Airlines Inc. Sucursal del Perú, reponer a Analie Marie Francoise Chahaneix Cusma en el cargo que venía desempeñando, en el plazo de 10 días.

Fue al declarar fundada la demanda de amparo contenida en el expediente N° 01049-2009-PATC, al no haberse acreditado la afirmación por la empleadora en el sentido que se habría afectado la imagen de la empresa por haber sido destituido la tripulante con una laptop y un proyector portátil.

No obstante, la autoridad aduanera estandarmente no emitió documentación alguna, como se ha dicho, que implicara la detección de alguna infracción lo que significa que no ha sido materia de observación alguna por la autoridad, por lo que alegar afectación a la imagen empresarial tampoco resulta un argumento válido para sustentar el despido.

Pese a no ser similares en sus fundamentos, los votos de los magistrados suscriptores alcanzan la mayoría suficiente para formular resolución de conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y su Reglamento Normativo.

De otro lado, el hecho que la tripulante portara una laptop y un proyector portátil que no podían ser

considerados como "efectos personales" según el Reglamento de Equipaje y Menaje de Casa, implica analizar si el despido efectuado como sanción a una dicha falta, justifica los criterios de razonabilidad y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia reiterada y uniforme del Tribunal Constitucional.

Aunque esta situación no ha sido alegada por la parte demandante, ni controvertido a lo largo del presente proceso. Sin embargo, no es menos cierto que, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del C.P., es deber del juez constitucional aplicar el derecho que corresponde al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente.



Jurisprudencia constitucional

Admiten a trámite demanda de inconstitucionalidad contra la Ley que modificó algunos artículos del Código Penal

A trámite fue admitida por el Tribunal Constitucional la demanda de inconstitucionalidad N° 0017-2011-PT/C interpuesta por el Fiscal de la Nación contra la Ley N° 27978 que modificó los artículos 344 y 409 del Código Penal; por considerar que vulneran los artículos 43°, 44° y 76° de la Constitución integrado por los artículos 3° y 15° de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción así como el artículo XII de la Convención Interamericana contra la corrupción. Al mismo tiempo, dispuso correr traslado de la demanda al Congreso de la República, de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Constitucional.

El Tribunal señala que si bien a la fecha de la interposición de la presente demanda la Ley cuestionada ha sido derogada por la Ley N° 27978, sin embargo, como expresa el demandante, al tratarse de una norma penal *favor rei* (favor al reo), dicha derogación no ha afectado su eventual aplicabilidad en un concurso de leyes penales en el tiempo, ya sea en relación a hechos cometidos antes de que entra en vigencia, como en relación a aquellos realizados durante el lapsus que si lo motivó; por lo que no existe impedimento para admitir la demanda, como se ha sostenido en reiterada jurisprudencia.

Por otro lado, el Fiscal de la Nación se encuentra legitimado para interponer demanda de



inconstitucionalidad conforme establece la Constitución así como el segundo párrafo del artículo 99° del Código Procesal Constitucional. Asimismo, la demanda ha sido interpuesta dentro del plazo establecido en el artículo 100° del Código Procesal Constitucional y cumple con lo establecido en el indicado Código, se han verificado los requisitos de admisibilidad y procedencia.

Sabías que...

El artículo 203° de la Constitución Política establece quienes están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad. Ellos pueden ser:

- 1.- El Presidente de la República.
- 2.- El Fiscal de la Nación.
- 3.- El Defensor del Pueblo.
- 4.- El 25% del número legal de congresistas.
- 5.- Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Si la norma en una ordenanza municipal, está facultado para interponerla el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente señalado.
- 6.- Los presidentes de Región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional, o los alcaldes provinciales con acuerdo de su Concejo, en materias de su competencia.
- 7.- Los colegas profesionales, en materia de su especialidad.

Reiteran criterios para pensión vitalicia por enfermedad profesional

De conformidad con el precedente vinculante (STC N° 02513-2007-PA/TC), el Tribunal Constitucional precisó los criterios respecto a las situaciones reconocidas en el Régimen Previsional de Riesgos Profesionales, aplicable a los procesos de amparo que se encuentren en trámite y cuya pretensión sea el otorgamiento de una pensión vitalicia por enfermedad profesional o de una pensión de invalidez conforme a la Ley 26790 y al Decreto Supremo 001-98-SA.

Al señalar al declarar improcedente la demanda N° 3108-2011-PA/TC, reafirmando que los jueces deberán requerir al demandante que presente, en el plazo de 60 días hábiles, el dictamen o certificado médico emitido por una Comisión Médica de Psaludo o del Ministerio de Salud o de una EPS, siempre y cuando el demandante, para acreditar la enfermedad profesional, haya ajustado a su demanda o pretensión durante el proceso un examen o certificado médico expedido por una entidad pública y no exista contradicción entre los documentos presentados.

En este caso, el demandante no pudo sustentar el certificado médico que presentó, emitido por la Comisión Médica Calificadora de la Incapacidad del Hospital Departamental de Huancavelica, perteneciente al Ministerio de Salud, la cual diagnosticó que padece de neuromiomas con 70% de metástasis global.

Se vulnera la eficacia del acto administrativo

Por haberse acreditado la vulneración del derecho a la eficacia del acto administrativo el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de cumplimiento N° 02841-2011-PC/TC y ordenó a la Universidad Nacional Federico Villarreal para que en un plazo máximo de 10 días hábiles de notificada la sentencia, cumpla con el mandato del Consejo de Asuntos Contenciosos Universitarios de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que dispone el ingreso a la carrera universitaria del docente, Jesús Teodoro Velarde Zevallos, con el pago de los costos, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución, imponga las medidas coercitivas previstas en el Código Procesal Constitucional.

El factor de la universidad manifestó que el cumplimiento de la resolución de la ANR que aprueba la solicitud de ingreso del demandante al servicio docente, requiere de actos administrativos previos. Señala que la misma carece de fundamentos lógicos y jurídicos por lo que contra ella se ha interpuesto una demanda de nulidad. Añade que la dificultad de la pretensión requiere de una actividad interpretativa compleja.

Al entrar al examen de los requisitos mínimos comunes, el Tribunal precisa que la resolución en cuestión contiene un mandato viciado, puesto que

no ha sido declarada nula, pues el proceso contencioso administrativo de nulidad que inició la universidad demandada concluyó por abandono; la resolución contiene también un mandato cierto y claro, que no está sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares ya que no contiene conceptos jurídicos indeterminados y permite individualizar de manera explícita al demandante como único beneficiario.

“Al declarar fundada la demanda de cumplimiento N° 2841-2011-PC/TC, el Tribunal Constitucional dispuso el ingreso a la carrera universitaria del docente, Jesús Teodoro Velarde Zevallos en la Universidad Nacional Federico Villarreal

De otro lado, el Tribunal considera pertinente señalar que la resolución que ordena al demandante que se reincorpore a la docencia universitaria en la Universidad demandada. La sentencia señala que los considerandos de la resolución contiene una fundamentación de la resolución de la ANR que el demandante se reincorpore a la carrera prevista en el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, por lo que la demanda debe ser estimada.

Sentencias penales que vulneren derechos fundamentales pueden ser cuestionadas a través del proceso de amparo



El Tribunal Constitucional ha reiterado que el proceso de amparo también sirve para proceso de amparo, se pretenda que el juez cuestionar la regularidad de decisiones constitucionales se pronuncie respecto de materias judiciales que vulneren en forma manifiesta ajenas a la tutela de derechos fundamentales, pues cualquier derecho fundamental. Al señalar al declarar improcedente la demanda de amparo recaída en el Exp. N° 03908-2011-PA/TC, menor valor probatorio a las pruebas que presenten interpuesta por el Jefe Zonal del Organismo de los sujetos procesales con el objeto de aportar al Formalización de la Propiedad Informal de esclarecimiento del ilícito instruido, nos asuntos Abancay, Antonio Velarde Casaverte, en la que especificó que corresponden ser dilucidadas aléjalo que en el proceso penal por desobediencia y únicamente por la justicia penal.

La demanda fue desestimada, por cuanto que vía el proceso de amparo también sirve para proceso de amparo, se pretenda que el juez cuestionar la regularidad de decisiones constitucionales se pronuncie respecto de materias judiciales que vulneren en forma manifiesta ajenas a la tutela de derechos fundamentales, pues cualquier derecho fundamental. Al señalar al declarar improcedente la demanda de amparo recaída en el Exp. N° 03908-2011-PA/TC, menor valor probatorio a las pruebas que presenten interpuesta por el Jefe Zonal del Organismo de los sujetos procesales con el objeto de aportar al Formalización de la Propiedad Informal de esclarecimiento del ilícito instruido, nos asuntos Abancay, Antonio Velarde Casaverte, en la que especificó que corresponden ser dilucidadas aléjalo que en el proceso penal por desobediencia y únicamente por la justicia penal.

Consecuentemente tal atribución escapa a la competencia de la jurisdicción constitucional, por lo que no es su facultad analizar la validez o invalidez de las sentencias dictadas, salvo que éstas o sus efectos contravengan los principios que informan la función esencial de la jurisdicción constitucional, o que los pronunciamientos adoptados vulneren los principios de razonabilidad y de proporcionalidad que toda decisión judicial debe observar, afectando con ello el modo manifiesto y grave cualquier derecho fundamental, lo que sin embargo, no ha ocurrido en el presente caso.





Jurisprudencia constitucional

Precisión en homologación de docentes universitarios excede la competencia del TC

Improcedente fue declarado por el Tribunal Constitucional el pedido de "precisión de ejecución de sentencia" de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP), por exceder la competencia de este Tribunal; no obstante, dejó a salvo su derecho para que lo hagan valgo conforme a ley. Así lo señaló en la resolución recaída en el expediente N° 00023-2007-P/TC, interpuesto por Gustavo Ibarra Veía y cinco mil ciudadanos, en representación del referido gremio de docentes.

El Colegiado precisa que mediante las resoluciones 00023-2007-P/TC y 001-2008-P/TC, el TC señaló que la competencia en etapas de ejecución de sentencias, en procesos de inconstitucionalidad, específicamente en el que corresponde al proceso de homologación, también le pertenece; siendo posible emitir órdenes para dar fiel cumplimiento a lo dispuesto en la respectiva sentencia.

En esta ocasión, el representante de la FENDUP, mediante escrito del 7 de julio de 2007, solicitó "precisión" sobre ejecución de sentencia, "posterior en conocimiento del Colegiado que en el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011, no se ha considerado el pago del último tramo de la homologación de los docentes principales del régimen pensionario del D.L. 20530 que han cesado después del 15 de octubre de 2008 (fecha de expedición de la sentencia del proceso de inconstitucionalidad).

Señala que dichos docentes se encontraban en condición de activos en la fecha de la decisión del D.L. 003-2005 y pese a que han recibido, como integrantes del Programa de Homologación, los dos primeros tramos de dicho Programa, se ha producido una exigencia injustificable de un derecho ganado en su oportunidad y vigencia desde aquella fecha.

Ordena pago de indemnización por confiscación de terreno

El Tribunal Constitucional precisó que se vulnera el derecho a la propiedad privada, cuando no existe la ley del Congreso de la República que declare la expropiación sino otra norma con rango de ley, o cuando existe la ley del Congreso de la República que declare la expropiación, pero no exprese alguno de los motivos contemplados en la Constitución para que proceda la expropiación, o se fundamente en motivos distintos; o cuando existiendo la ley del Congreso que señale alguno de los motivos de expropiación contemplados en la Constitución, ésta se produce sin indemnización.

En estos supuestos se produce por parte del Estado la confiscación del derecho a la propiedad privada por cuanto se apodera de la totalidad o de una parte considerable de los bienes de una persona sin que exista ley del Congreso de la República o sin que se presenten algunos de los motivos contemplados en la Constitución para que proceda la expropiación, o sin haberse establecido la indemnización.

Así lo señaló el Tribunal Constitucional al declarar fundada la demanda de amparo contenida en el expediente N° 02330-2011-P/TC interpuesta por los sucesores procesales de San Fernando Pachacamac Reusche S.C.R.L., al haberse acreditado la violación del derecho de propiedad y en consecuencia inaplicable la Resolución Directoral N° 42381-A-DRA-V-I, y el Decreto Supremo N° 041-82-AG.

Al mismo tiempo ordenó al Ministerio de Agricultura iniciar el procedimiento de expropiación previsto en la Ley N° 27111 para que, dentro de un plazo razonable no mayor a cuatro meses, le abone a los demandantes la indemnización justificada por la propiedad confiscada, con los costos del proceso.

En el presente caso, no al existir una ley del Congreso de la República que expropie las treinta y siete hectáreas -cinco mil metros cuadrados del predio rústico denominado "San Fernando", se encuentra probada la confiscación de la propiedad mencionada, y por ende, la vulneración del derecho a la propiedad privada de la Sociedad demandante, pues lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 42381-A-DRA-V-I, y el Decreto Supremo N° 041-82-AG infringe por la forma el artículo 129° de la Constitución de 1979, vigente al momento en que se produjo la declaración en estado de abandono de la propiedad referida y la adjudicación a favor de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural.

Desestiman pedido de Eduardo Calmell del Solar para que se anulen órdenes de captura nacional e internacional dictadas en su contra

El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de hábeas corpus N° 02468-2010-PHC/TC de Eduardo Calmell del Solar para que se anule las órdenes de captura nacional e internacional dictadas en su contra por los jueces peruanos en el proceso que se le sigue por los delitos contra la administración pública -peculado y contra la tranquilidad pública -asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado. Alega que tiene calidad de cosa juzgada el pronunciamiento de la Corte Suprema de Chile que rechazó la extradición, por lo que considera que se vulnera su derecho de libre tránsito al no poder salir de ese país.

El TC consideró que la extradición debe ser entendida como un procedimiento mediante el cual un Estado es requerido para que haga entrega de un individuo que se encuentra dentro de su territorio y que tiene la condición de procesado o condenado por un delito común, al



Estado requeriente o solicitante, en virtud de un tratado o a falta de este, por aplicación del Principio de Reciprocidad, para que sea puesto a disposición de la autoridad judicial competente y se le enjuicie penalmente; o para que se cumpla y se ejecute la pena impuesta, si se hubiera producido previamente el proceso penal correspondiente, conforme a la sentencia recaída en el proceso N° 3966-2000-P/TC.

El Tribunal Constitucional precisa que el acceder o denegar una extradición no implica una calificación de los hechos que conlleva la expropiación del demandante, toda vez que ello es propio de un proceso ordinario. Por lo que, siendo así, y estando vigente el mandato de detención dictado -dentro de un proceso- con penas con las garantías de ley, la demanda fue desestimada al no haberse acreditado la vulneración de los derechos constitucionales invocados.

En el presente caso, el TC advierte que la decisión que motivó el rechazo del pedido de extradición constituye una Resolución o Ejecutoria Judicial Suprema que pueda calificar el hecho como cosa juzgada, pues como se ha expresado, la extradición es un instituto jurídico que viabiliza la remisión compleja de un individuo por parte de un Estado a los órganos jurisdiccionales competentes de otro, a efectos de ser enjuiciado o cumpla con una condena.

Declaran fundado recurso de apelación por salto y ordenan a la SUNAT devolver a la demandante pagos coactivos efectuados con intereses

Fundado declaró el Tribunal Constitucional el recurso de apelación por salto recaído en el Exp. N° 1046-2011-P/ATC interpuesto por la empresa Export Import Distribuidores del Perú S.A., a instancia de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para que en ejecución de la sentencia emitida en el expediente N° 03868-2007-P/ATC, le devuelva los pagos efectuados en el expediente coactivo y acumulados, con los intereses respectivos.

El Colegiado estima que la pretensión contenida en el recurso de apelación por salto se encuentra comprendida en el supuesto de hecho previsto en la Ley N° 00004-2009-P/ATC, motivo por el cual la apelación debe ser estimada puesto que los pagos que efectuó la Sociedad en el Expediente Coactivo y acumulados tenían como sustento resoluciones que han sido declaradas nulas por la sentencia emitida en el expediente N° 03868-2007-P/ATC, razón por la cual dichos pagos no pueden ser calificados como debidos.

La reposición de las cosas al estado anterior dispuesto por la sentencia no solo origina que se declare la nulidad de las resoluciones emitidas al amparo de la Resolución de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, sino también la devolución a la demandante de los tributos pagados al amparo de la misma.

El Tribunal considera que la sentencia emitida en el expediente N° 03868-2007-P/ATC no ha sido cumplida en sus propios términos.

TC reitera criterios para analizar la eventual violación del derecho constitucional al plazo razonable

El Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de analizar la eventual violación del derecho al plazo razonable del proceso y siguiendo los criterios sentados por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se consideró que este análisis debe realizarse a partir de lo siguiente: la naturaleza y complejidad de la causa, la actividad procesal del imputado y la actuación de los órganos jurisdiccionales, tal como fueron recogidos por el TC en caso Federico Tiberio Berrocal Prudencio (RTC N° 2915-2004-HC/TC).



Así lo señaló al revocar la resolución recaída en el expediente N° 3745-2010-PHC/TC y declarar nulo todo lo actuado desde fojas, debiendo el juez de primera instancia emitir el pronunciamiento constitucional que corresponda, conforme a los fundamentos expresados en la presente resolución. La demandante Hilda Alegría Ramírez Barales, interpuso demanda de hábeas corpus contra los valores integrantes de la Primera Sala Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de San Martín y denunció la vulneración de su derecho a ser juzgada en un plazo razonable y al debido proceso.

El Tribunal ha precisado también, que el término inicial del cómputo del plazo razonable del proceso opera a partir del inicio de la investigación

+DATOS

Con relación al pago de intereses debe señalarse que en la STC 00282-2003-AA/TC este Tribunal ordenó que la devolución de pagos indebidos por tributos debiera incluir "los intereses actualizados a la fecha de la decisión". En tal, la posibilidad de pagar intereses por pagos indebidos de tributos se encuentra reconocida en el artículo 38° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, por lo que este extremo resulta estimable.

En el presente caso, se aprecia que las instancias judiciales del hábeas corpus no han realizado el análisis de cada uno de los criterios antes mencionados, pues se ha desestimado la demanda con el argumento de que la acusación fiscal y el auto superior de enjuiciamiento en modo alguno tienen incidencia negativa y concreta en el derecho a la libertad individual y menos a sus derechos conexos, por lo que carece de contenido constitucional pronunciarse respecto a la pretensión, criterio que resulta incompatible con lo establecido por este Tribunal en el aludido Expediente N° 2915-2004-HC/TC en el que se determinaron los criterios para verificar la presunta vulneración al plazo razonable del proceso.

Jurisprudencia constitucional

Para ejercer la profesión de químico farmacéutico sólo es necesario estar inscrito en el colegio nacional o departamental

De conformidad con el Decreto Ley N° 25873, todos los profesionales de la República, tienen por obligación inscribirse en uno de los colegios departamentales de la profesión correspondiente para el ejercicio libre de su profesión, recordó el Tribunal Constitucional. Bajo esta premisa, los profesionales químicos farmacéuticos se encuentran en la obligación de encontrarse inscritos en los colegios departamentales o nacionales para poder ejercer su profesión, no siendo exigible otro requisito por ley.

Así lo precisó al declarar fundada la demanda de amparo contenida en el expediente N° 03904-2011-PA/TC, formulada por Alicia Felicitia Chávez Tyne, contra la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud (DIGEMID), ordenando a dicha entidad en un plazo no mayor a dos días de notificada la presente sentencia, proceda a inscribir a la profesional química farmacéutica que formuló la demanda, en el Registro de Regentes y Directores Técnicos del DIGEMID, exigiéndole adicionalmente los requisitos que dispone el Ministerio de

Salud, únicamente copia del carné expedido por el Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima, bajo apercibimiento con el abono de costos.

La inscripción obligatoria para el ejercicio de la profesión ante el Colegio Químico Farmacéutico del Perú o Colegio Nacional, como el Colegio Químico del Perú o Colegio Nacional, fue derogada tácitamente por el citado decreto ley. En el presente caso, se le informa a la demandante que uno de los requisitos para la inscripción y/o actualización en el Registro de Regentes y Directores es el carné del Colegio Profesional vigente, el cual debe ser expedido por el Colegio Químico Farmacéutico del Perú o Colegio Nacional.

La facultad de expedición del carné de habilitación para el ejercicio de la profesión de químico farmacéutico, que la ostentaba el Colegio Químico del Perú o Colegio Nacional, fue transferida a favor de los Colegios Químicos



Farmacéuticos Departamentales en virtud de lo dispuesto por el Decreto Ley 25873.

El Tribunal precisa que la interpretación que se ha venido efectuando del requisito contenido en el procedimiento 140 del TUPA del Ministerio de Salud, resulta arbitraria y por lo tanto lesiva del derecho al ejercicio profesional de la demandante, por lo que se ha vulnerado los derechos de petición, al trabajo y al debido proceso de la ciudadana profesional.

30 días es el plazo para interponer una demanda de amparo en contra de una resolución judicial

El Tribunal Constitucional precisó que de conformidad con el artículo 44° del Código Procesal Constitucional, transiéndose de procesos de amparo con resoluciones judiciales "el plazo concluye trece días después de la notificación de la resolución que ordena su cumplimiento a la decisión".

Así lo señaló al declarar improcedente la demanda de amparo N° 02511-2011-PA/TC, interpuesta por Luis Guillermo Gastelumendi contra la resolución judicial que declara infundada su demanda de indemnización contra EsSalud, alegando la violación de sus

derechos constitucionales, al haber sido incluido en un proceso del que es ajeno, donde se embargó su vehículo.

La Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda por considerar que se pretende el reexamen del cuestionado proceso, a fin de que se valore nuevamente los medios probatorios admitidos. A su turno, la Sala de Daños y Resarcimiento de la Corte Suprema de Justicia de la República, confirmó la resolución apelada por similares fundamentos.

El Tribunal precisa que de conformidad con el Código Procesal Constitucional (CPC) no proceden los procesos constitucionales cuando se ha vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del proceso del hábeas corpus. El artículo 44° del referido CPC ratifica que el plazo concluye treinta días después de la notificación que ordena su cumplimiento a la decisión.

En el presente proceso se aprecia que la resolución cuestionada, fue impugnada el 28 de marzo de 2007, expidiéndose la resolución de fecha 26 de setiembre del mismo año mediante la cual se declara improcedente el recurso de Casación interpuesto, siendo ésta notificada el 23 de noviembre de 2007. Por consiguiente, a la fecha de la interposición de la presente demanda (7 de mayo de 2008), el plazo para tal fin ya había prescrito por haberse vencido el plazo establecido en el precitado artículo 44° del Código Procesal Constitucional, habiéndose configurado, por lo tanto, la causal de improcedencia.



Hábeas corpus correctivo tutela el derecho del recluso a no ser objeto de malos tratos cuando cumple la detención o la pena

Para tutelar "el derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carcelario de no humanidad y proporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena", procede el denominado hábeas corpus correctivo, recordó el Tribunal Constitucional, tras referirse al artículo 25 del Código Procesal Constitucional. Así lo anuló en la sentencia N° 03169-2011-PR/TC, que declara infundada la demanda, al no haberse acreditado la vulneración del derecho alegado.

El supuesto grado de injusticia constitucional precisa que aún cuando la libertad individual es encontrada restringida por un mandato judicial (la detención provisional, la prisión preventiva o el cumplimiento de una pena) procede el hábeas corpus correctivo respecto de los actos o omisiones que comporten la violación o amenaza de los derechos componentes de la libertad personal, como lo son, entre

otros, del derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, del derecho a la vida familiar y de manera muy significativa del derecho al trato racional y digno así como a no ser objeto de penas o tratos inhumanos o degradantes, conforme a las sentencias N° 098-2001-JH/TC; N° 2663-2003-JH/TC; N° 1429-2002-JH/TC.

Al respecto el Tribunal Constitucional reiteró que tratándose de personas privadas legalmente de su libertad locomotora, una obligación de la que no pueden rehuir las autoridades penitenciarias es la de prestar las debidas garantías para que no se afecte o lesione la vida, la integridad física y los demás derechos constitucionales que no hayan sido restringidos.

Ello supone que, dentro de márgenes sujetos al principio de razonabilidad, las autoridades penitenciarias no sólo

pueden, sino que deben adoptar aquellas medidas estrictamente necesarias para preservar los derechos constitucionales de los internos, cada vez que existan elementos razonables que adviertan sobre el eventual peligro en el que éstos se puedan encontrar de conformidad con la sentencia N° 0726-2002-JH/TC, entre otros.

Es por ello que cabe el control constitucional respecto de las condiciones en las que se desarrolla la restricción del ejercicio de la libertad individual, en todos aquellos casos en que esta se haya decretado judicialmente e incluso cuando ésta sea debida a una detención policial o en sujeción a un internamiento en establecimientos de tratamientos públicos o privados, siendo requisito indispensable cada caso concreto, que el agravamiento respecto de las formas o condiciones en que se cumple la privación de la libertad sea ilegal o arbitrario.

Rechazo pretensión de pesquera para no dar aporte a favor de caja de beneficios del pescador

El Tribunal Constitucional resolvió declarar infundada la demanda de amparo contenida en el expediente N° 02835-2010-PA/TC, interpuesta por la Empresa Pesquera San Fermín S.A., contra la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP), afirmando que se le vienen vulnerando una serie de derechos y principios constitucionales, al solicitarles el cumplimiento de la restitución del aporte obligatorio de US\$ 0.26 por tonelada métrica de pescado, al fondo de jubilación de la CBSSP, según lo dispone la Ley N° 28320.

Tras un amplio análisis, el TC encuentra que no se ha acreditado la vulneración de derecho alguno de la demandante y que dicha medida normativa responde al plan de reestructuración a la que fue sometida la CBSSP a fin de lograr la viabilidad del fondo con la restitución de US\$ 0.26 a cargo de las empresas industriales pesqueras. Cabe agregar que la Superintendencia de Banca y Seguros no encontró observaciones al citado Plan.

El Tribunal indica también que las empresas industriales pesqueras no sólo explotan un recurso (hidrobiológico) que pertenece a la nación, sino que, además, se encuentran en el ámbito del mismo sector al que pertenecen los trabajadores pescadores. En efecto, los trabajadores pescadores son quienes con su trabajo (riesgo, aleatoriedad, de gran esfuerzo físico) extraen el recurso que las empresas industriales procesarán.

Es decir, se trata de una cadena productiva en el sector pesquero que se inicia con el trabajo del productor, por lo que resulta equitativo y razonable que en atención al principio de solidaridad social, el sector que genera mayores ingresos y utilidades contribuya al fortalecimiento y viabilidad del fondo de jubilación. En ese sentido, la Ley N° 28320 no resulta una medida arbitraria, irrazonable o desproporcionada, sino legítima, razonable, necesaria y absolutamente indispensable para la consecución de un fin legítimo.

Finalmente el Tribunal señala que no es intrascendente anotar que es consciente de las críticas que la tensión en su desarrollo de la CBSSP. Es decir, no solo se trata de viabilizar las medidas legislativas para contar con los fondos económicos para reflowar un sector, sino que los órganos de administración deben prestar un trabajo con el máximo de responsabilidad, teniendo como fin la eficiencia de los recursos que se le confía. En ese sentido, la sentencia también exhorta a la Superintendencia de Banca y Seguros a cumplir con su función supervisora y de control en relación con la administración de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador.



SCADORES JUE



Jurisprudencia constitucional

Oráculo jurídico

1. ¿Qué se entiende por Constitución Ecológica?

Tomando en cuenta la doctrina y la jurisprudencia constitucional comparada, se ha determinado Constitución Ecológica al conjunto de disposiciones de la Carta Fundamental referidas a las relaciones entre el individuo, la sociedad y el medio ambiente. Algunos de los conceptos que la integran son, por ejemplo: el derecho de desarrollo sostenible, en virtud del cual se promueve la utilización de los recursos naturales y de la diversidad biológica teniendo en cuenta que éstos también deben servir para la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; el principio de prevención, según el cual el Estado debe adoptar las acciones pertinentes para prevenir un daño al medio ambiente que en la actualidad es potencial; la responsabilidad social de la empresa y sus ámbitos de aplicación, entre otros (STC 0348-2007-PAC, F. 25).

2. ¿Cuál es el contenido esencial del derecho a un medio ambiente equilibrado?

El contenido esencial del derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona humana está determinado por los siguientes elementos: a) el derecho a gozar de medio ambiente; y b) el derecho a que ese medio ambiente, se preserve (STC 0423-2006-PAC, Fundamentos 20-22).

3. ¿Qué establece la Constitución respecto al contenido protegido del derecho a un medio ambiente equilibrado?

La Constitución no señala cuál es el contenido protegido del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. A diferencia de muchos derechos constitucionales cuyo contenido protegido puede extraerse de su formulación constitucional o de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en el caso del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado, la determinación de qué contenido es más problemático. No obstante, la Constitución siempre propone algunas características a partir de las cuales se podría determinar su contenido. En efecto, no solo se limita a señalar que es un atributo subjetivo del ser humano el vivir en un medio ambiente (lo que desde luego significaría dar cosa, pues todos vivimos en uno), sino que también subraya que ese "ambiente" debe ser "equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida" (STC 0094-2002-PAC, Fundamentos 8-9).

4. ¿Cuál es la naturaleza del derecho a un medio ambiente equilibrado?

Se trata de una doble naturaleza: reactiva y preventiva. Con relación a su aspecto reactiva, se entiende que el derecho a un ambiente equilibrado es aquel que el Estado se abstiene de realizar acciones de degradación que afectan el ambiente. Por su parte, el aspecto preventivo exige que el Estado implemente políticas de prevención y de conservación del ambiente (STC 0510-2003-PAC, Fundamento 2).

5. ¿Qué se entiende por principio de prevención?

El principio de prevención garantiza que se tomen las medidas necesarias a fin de evitar que los daños al ambiente se generen o que, en caso de lleguen a producirse, la afectación sea mínima. Es decir, que, frente a un posible daño ambiental, se deben adoptar las medidas necesarias a prevenir afectaciones al ambiente (STC 01206-2005-AATC, Fundamentos 6-10).

6. ¿Qué se entiende por principio precautorio?

El "principio precautorio" o también llamado "de precaución" o "de cautela" se encuentra expresamente fijado al desarrollo del principio de prevención. Este exige la adopción de medidas de protección antes de que se produzca realmente el deterioro al medio ambiente. Aquel orden más bien ante la amenaza de un daño a la salud o medio ambiente y la falta de certeza científica sobre sus causas y efectos. Es justamente en esos casos en que el principio de precaución puede justificar una acción para prevenir el daño, tomando medidas antes de tener pruebas de este (STC 0510-2003-AATC, Fundamento 4).

7. ¿Cuáles son las obligaciones prestativas del Estado en relación con el derecho a un medio ambiente equilibrado?

Este derecho, en su dimensión preventiva, impone al Estado tomar las acciones destinadas a conservar el medio ambiente sano y equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades. Desde luego, no solo sobre tareas de conservación, sino también de prevención de daños de ese ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de una vida digna. Dentro de las tareas de protección que el Estado está llamado a desarrollar tiene especial relevancia la tarea de prevención y, desde luego, la restricción de acciones destinadas a ese fin. Así, la protección del medio ambiente sano y adecuado no solo es una cuestión de reparación frente a daños ocasionados, sino, y de manera especialmente relevante, de prevención de que ellos sucedan. De este modo, la protección del medio ambiente supone hacer efectiva desde la provisión de medidas reactivas que hagan frente a los daños que ya se han producido, pasando por medidas que hagan frente a riesgos conocidos antes de que se produzcan preventivamente, hasta medidas que prevengan y eviten amenazas de daños desconocidos o inciertos (precaución) (STC 0348-2007-AATC, Fundamentos 8 y 9).

Rechazan pedido de información sobre extradición de ex presidente Fujimori por contener información confidencial

La demanda de hábeas data mediante la cual un ciudadano pedía que el Ministerio de Relaciones Exteriores le entregue el informe elaborado por el abogado Roberto Mac Lean Ugurichu, relacionado con el proceso de extradición del ex Presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori, fue rechazado por el Tribunal Constitucional, por considerar que el citado documento aún contiene información confidencial en la medida que detalla actuaciones vinculadas al caso Barrios Altos y la Cantuta.

Fue al declarar infundada la demanda contenida en el expediente N° 04425-2009-PHD/TC interpuesta por Ricardo Uceda Pérez, en la medida que la restricción de acceso al informe resulta legítima en atención a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El Tribunal considera que dicho informe contiene opiniones técnicas que pueden ser utilizadas en dichos procesos, los cuales



en la actualidad aún se encuentran judicializados.

En tal sentido, el referido informe se halla dentro del amparo de la excepción contenida en el numeral 4° del artículo 15-B de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que en el presente caso, la restricción al acceso del informe por parte de terceros resulta legítima.

El Colegiado precisó que en atención al contenido de carácter confidencial del Informe en mención, únicamente ha procedido a consignar en el expediente, el escrito mediante el cual se recibió dicha información para su correspondiente estudio, procediendo a devolver en caso de ser lacrado su contenido íntegro al Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la carta de fecha 25 de octubre de 2011, por lo que a la fecha el Tribunal Constitucional no cuenta con archivo alguno del referido informe, dado su carácter confidencial.

Información de proceso penal terminado no afecta la intimidad personal

Todo órgano del Estado o entidad con personería jurídica de derecho público se encuentra obligado a proveer la información solicitada, siendo excepcional la negación del acceso a la misma por razones de seguridad nacional, afectación a la intimidad personal o en los supuestos establecidos por ley, precisó el Tribunal Constitucional tras recordar que así lo ha establecido como regla general a través de su jurisprudencia.

Fue al declarar fundada la demanda de hábeas data (Exp. N° 02040-2010-PHD/TC) interpuesta, por Julio Teodoro Villena Ramírez por haberse acreditado la vulneración del derecho de acceso a la información pública y dispuso la entrega de la información solicitada al demandante, previo pago del costo real que ello implique.



El demandante pretende que se le entregue la información que contiene el expediente terminado N° 04-2003 por abuso de autoridad y otros, seguidos contra Wilbert Vizcarra Caceres, ex juez de paz de la urbanización Gráficos, del distrito de Aho Selva Alegre, en cuyo proceso el aludido exagristado demostró no haber incurrido en infracción penal, pues se

le atribuyó haber actuado con fraude en su agravio durante el proceso de obligación de dar suma de dinero

El Tribunal estima que para que una determinada información sea considerada confidencial, y por ende, inaccesible al conocimiento de terceros, no basta con alegar su carácter meramente particular o personal, sino que, además, es preciso que su publicidad constituya una "invasión a la intimidad personal y familiar" en los términos en que ello viene exigido por la ley de la materia.

El Colegiado considera que en este caso no se vulnera el derecho a la intimidad personal o familiar del exagristado, pues más allá del mero uso de una investigación ya concluida, es razonable deducir, en vista del tipo de delito imputado (abuso de autoridad), que el conocimiento de la investigación realizada no constituye una intromisión ilegítima en su vida íntima o familiar.

Prueba de ADN permite el reconocimiento de la filiación

El Tribunal Constitucional reconoció el derecho de identidad en los procesos de declaración de paternidad y de esta forma, detrahe de toda pretensión de declaración de paternidad sujeta in vivo el ejercicio del derecho fundamental a la identidad, el cual comprende el derecho a un nombre, conocer a sus padres y conservar sus apellidos, el relativo a tener una nacionalidad y la obligación de que el Estado reconozca su personalidad jurídica.

Fue al declarar infundada la demanda de amparo, recaída en el expediente N° 00227-2011-PATC al no acreditarse la vulneración de derecho constitucional del recurrente y, en consecuencia, ordenó la actuación de la prueba de ADN al constituir la concretización judicial del derecho de la demandante a la



identidad, a efectos de saber realmente quién es o no es su padre.

En este caso, el recurrente pretendía que la prueba de ADN ordenada de oficio no se actuara en el proceso judicial en el que ha sido demandado.

El Colegiado consideró que la prueba de ADN, como tal, es pertinente e indispensable para resolver la pretensión de declaración judicial de paternidad y, más aún, para resolver los puntos controvertidos fijados en el proceso judicial.

De esta manera, se evidencia que la prueba de ADN cumple, el requisito de pertinencia respecto a lo que constituye el objeto del proceso de declaración de paternidad, por lo que atendiendo a la especial consideración del caso, en donde el presunto progenitor ya ha fallecido, el TC atribuye la pertinencia y la utilidad de la prueba de ADN al proceso judicial, la que servirá para acreditar si Juan Antonio Mariani Calandrea es el padre o no de la demandante Ludovica del Cisne Mariani Tapia.

Informativo Mensual

DIRECTOR GENERAL

Carlos Mesía

Magistrado del Tribunal Constitucional

Consejo Editorial

Kharine Benivertuo

Alberto Che Piu

Jesús Silva

Redacción:

Oficina de Imagen Institucional

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.° 2009-05639

Colaborador: Giancarlo Gresci

Diagramación: Christian Guerra

Año 4 N.º 34, enero 2012 - Tiraje: 10,000 ejemplares

Se presentó video del coloquio "El Nuevo Código Procesal Penal ante la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional"

El Tribunal Constitucional presentó el video del coloquio "El nuevo Código Procesal Penal ante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", realizado en el aula magna del Centro de Estudios Constitucionales el mismo que recoge las exposiciones de los destacados juristas, que participaron así como sus conclusiones a las que arribaron.



El director general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC), magistrado Gerardo Eto Cruz explicó que la actividad académica fue como propósito analizar las divergencias existentes entre el enfoque de los derechos e instituciones procesales penales asumido hasta la fecha por la jurisprudencia del TC y la alternativa del nuevo Código Procesal Penal, a fin de lograr propuestas de modificación o

consolidación de criterios en la jurisprudencia constitucional con miras a fortalecer el nuevo sistema procesal penal peruano.

En la mesa central, estuvieron el presidente del TC, magistrado Ernesto Álvarez Miranda, el director general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Gerardo Eto Cruz y Horst Schönborn, ex representante de GIZ.

El Coloquio estuvo conformado por tres temas temáticos. La

primera referida a garantías constitucionales del debido proceso penal, como la presunción de inocencia y valoración de la prueba, derecho a ser juzgado en un plazo razonable, principio de *ne bis in idem*, y el principio de prohibición de la *reformatio in pejus*. La segunda, mesa sobre investigación en el nuevo proceso penal y el tercero los derechos del investigado y límites a la libertad personal.

+DATOS

El Coloquio "El Nuevo Código Procesal Penal ante la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional" se realizó en Lima los días 24 y 25 de setiembre del año 2009 contando con la participación de los destacados juristas Gerardo Eto Cruz, Arsenio Oré Guardia, Fernando Jigá Zegarra, Pedro Angulo Arana, Alberto Che Pió, Virginia Alcalde, José Luis Renfo, Julio Rodríguez Delgado, César Azabache, Víctor Cúbar Villanueva, Edgar Cárpio, José Luis Castillo Alva, Mario Rodríguez, Dirmo Carlos Cora Coria y Roger Rodríguez Santander.

Supremo Tribunal Federal de Brasil destaca video de "La Constitución al alcance de los niños" elaborado por el Tribunal

La difusión del libro y video educativo en dibujos animados de "La Constitución al alcance de los niños" producido por el Tribunal Constitucional de Brasil, fue destacado por el Supremo Tribunal Federal (STF), el más alto tribunal del Poder Judicial de Brasil.

En su página web, el Tribunal brasileño señala que con el fin de que más personas lean acerca de la Constitución Política del Brasil, el Tribunal Constitucional del Perú, en colaboración con el Ministerio de Justicia, creó en el 2010 el libro "La Constitución del Perú al alcance de los niños", que se comitirá posteriormente en video en el 2011, de los peruanos", señala parte de la nota que difundieron.

Agrega que gracias a este trabajo, los alumnos de cuatro a diez años en todo el país pueden conocer sus derechos y la estructura del Estado peruano, lo que contribuye a la formación de una cultura cívica desde la niñez.



Finalmente informaron que el video fue puesto a disposición de los presidentes y delegados a la Novena Reunión de Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales de los países miembros y asociados del MERCOSUR el 16 de noviembre del 2011. Es una excelente iniciativa para formar ciudadanos mejor informados sobre sus derechos y deberes.

"El libro consta de cuatro capítulos, que son presentados a manera de relatos que buscan adentrar a los niños en las principales disposiciones constitucionales, tales como los derechos fundamentales, las libertades civiles, la familia, la salud básica y el bienestar, educación, la recreación, las actividades culturales y las medidas necesarias a su protección, elementos del estado como el territorio, los símbolos y la estructura de poderes, los recursos naturales y, por último, las competencias de la Corte Constitucional como garante supremo de los derechos fundamentales de los peruanos", señala parte de la nota que difundieron.

Finalmente informaron que el video fue puesto a disposición de los presidentes y delegados a la Novena Reunión de Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales de los países miembros y asociados del MERCOSUR el 16 de noviembre del 2011. Es una excelente iniciativa para formar ciudadanos mejor informados sobre sus derechos y deberes.

Se debe elegir jueces que respeten la Constitución

El reto de todo reformador judicial es elegir a magistrados respetuosos de la Constitución y con gran conciencia de los derechos fundamentales, afirmó el doctor Carlos Mesa Ramírez, magistrado del Tribunal Constitucional en el Foro Internacional denominado "Los nuevos tendencias de la Administración de Justicia: Retos de la nueva Corte Nacional de Justicia", realizado el 23 y 24 de enero en la ciudad de Quito en Ecuador.

En su exposición, el doctor Mesa precisó que no hay reforma institucional si existe con jueces que no están dispuestos a controlar el poder y a garantizar la vigencia efectiva de los derechos humanos.

En el evento internacional se abordaron temas como la reconstrucción de la justicia en el Ecuador, Los nuevos retos de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador y Derechos humanos, equidad y acceso a la justicia. La inauguración estuvo a cargo del presidente del Consejo de la Judicatura, Ing. Paulo Rodríguez y contó con la presencia de los vocales de la Corte ecuatoriana.

Los tribunales constitucionales fortalecen el estado de derecho

Los tribunales constitucionales fortalecen el Estado de Derecho y las instituciones democráticas, señaló el magistrado Gerardo Eto Cruz, director general del Centro de Estudios Constitucionales del TC, durante su participación en el foro "Experiencias latinoamericanas sobre el funcionamiento de los tribunales constitucionales y sus impactos al Estado de Derecho y la institucionalidad democrática", realizado en la ciudad de Tegucigalpa en Honduras. Agregó que en donde existen tribunales constitucionales, "hay gobernabilidad, predictibilidad del sistema judicial, transparencia y una gestión más especializada del Derecho Procesal Constitucional".

"Crear un Tribunal Constitucional no implica restarle competencias al Poder Judicial de un Estado, sino que fortalece la gestión de la justicia, en tanto que la Corte Suprema de Justicia seguirá conociendo en primera instancia de los recursos de habeas corpus, habeas data y el recurso de amparo, además de que se restablezca plenamente el recurso de revisión", precisó en su intervención el Director general.

Francisco Morales Saravia (*)

Plan Estratégico Institucional del Tribunal Constitucional 2008 - 2012

Durante el segundo semestre del 2008 el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) aprobó su Plan Estratégico Institucional para el periodo 2008 - 2012. Culminaba así un trabajo de varias meses que fue dirigido por los consejeros Juan Jiménez Mayor (hoy Ministro de Justicia) y Manuel Cossío Olivares, experto en Gestión Pública. Desarrollar un Plan Estratégico para varios años fue un esfuerzo ambicioso que se logró gracias al apoyo del proyecto JUSPER, de la Unión Europea y de la GTZ. Desde aquella fecha y hasta hoy las actividades del Tribunal Constitucional se han desarrollado bajo esa guía. Es así que durante las presidencias de Carlos Mesa Ramírez (2008 y 2010-2011), Juan Vergara Gottioli (2009-2010) y Ernesto Álvarez Miranda (2012), los esfuerzos de los magistrados, funcionarios y trabajadores han estado encaminados en lograr el cumplimiento total del Plan.

La visión para el Tribunal Constitucional, formulada en el Plan, establece que el TC debe consolidarse como la institución más legítima sumatoria en la defensa de los derechos fundamentales y la afirmación de la institucionalidad jurídica del país, conformada por profesionales probos y altamente especializados con recursos y procesos organizacionales eficientes y efectivos. Para hacer realidad la visión se plantearon cuatro estrategias: 1) Mejorar el diseño y ejecución de todos los procesos (jurisdiccionales y administrativos) orientados al justiciable y la ciudadanía; 2) Proveer una mejor atención a los usuarios afortunadamente exitosamente a larga escala, mediante la optimización en el uso de los recursos, la calidad de los procesos internos y la capacidad de los recursos humanos; 3) Consolidar las tareas de difusión de las funciones y la labor del TC ante la ciudadanía, los operadores jurídicos, las entidades del Estado y la comunidad internacional; 4) Conformar una organización orientada al cambio continuo, adaptando las buenas prácticas y herramientas de gestión para un mejor servicio al ciudadano.

A lo largo de los últimos años, la gran mayoría de las actividades del TC ha estado encaminada desde de estas cuatro estrategias. Por ejemplo, a fin de difundir los resultados y logros del Tribunal se diseñó una nueva versión de la página web del TC, se creó el programa de televisión "Tus Derechos" emitido por TV Perú Canal 7, se diseñó el sitio en internet TC al día, se editó el Boletín Institucional y se transmiten las audiencias públicas en vivo por internet. Para reducir el ciclo de procesos para la resolución de casos, se ha desarrollado el Sistema Informativo de Procesos Constitucionales (SICOCONST) también conocido como expediente virtual, gracias al apoyo del PMSI del Banco Mundial, y que este año se aplica a los Procesos de Inconstitucionalidad y Conflictos de Competencia. Asimismo, este año, en el Marco del PMSAI del BID, se iniciará la informatización total de las actividades del TC, así como de los servicios que brinda.

Para los efectos de la difusión de nuestra jurisprudencia, el Centro de Estudios Constitucionales (CEC), con el apoyo del PNUI, ha editado dos ediciones de 6000 y 10000 CDs de la jurisprudencia de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y se han desarrollado talleres de difusión de la jurisprudencia constitucional en todos los distritos judiciales del país. Asimismo, se han desarrollado talleres con los fiscales en materia penal y procesal penal. El CEC y el CAJAE del TC han desarrollado programas de capacitación y actualización y cursos sobre Derecho Procesal Constitucional. Del mismo modo, la labor editorial ha sido descuidada y se han publicado varios libros, así como la Revista Peruana de Derecho Constitucional.

De otro lado, se ha mejorado la remuneración de todos los asesores y trabajadores del TC y a muchos funcionarios se les ha capacitado en Gestión Pública gracias al Proyecto JUSPER y PMSI del Banco Mundial, en la Universidad del Pacífico. Para el presupuesto de este año, el Congreso de la República aprobó los fondos para la compra de un terreno en Lima, y este año deberá destinarse los fondos para la construcción de la nueva sede en Lima (Dte. Iquitos). Igualmente, se está en marcha la celebración de un convenio con el Gobierno Regional de Arequipa para la entrega de un terreno y fondos para la posterior construcción de la nueva sede en Arequipa.

Finalmente, a fines del año pasado se presentó el video animado titulado "La Constitución al alcance de los niños", que gracias al apoyo del PMSI del Banco Mundial se ha impugado como una iniciativa destinada a difundir los valores de la Constitución entre los niños de 4 a 10 años de edad. Durante estos últimos años, el logro más importante en materia de Difusión Jurisdiccional Internacional fue incorporarse al Perú a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, y dos de nuestros magistrados (Carlos Mesa y Gerardo Eto) son representantes de este organismo, que agrupa a todas las democracias de Europa Occidental, Europa del Este así como a las repúblicas soviéticas; por Latinoamérica solo México, Brasil, Chile y Perú forman parte de ella.

Este año es clave, pues el reto del Tribunal Constitucional es culminar al cien por ciento las actividades de difusión de la Constitución, lo que se logra al estar en consonancia con ellos nos convertiremos en una de las primeras instituciones públicas que cumple a cabalidad dicho Plan.

(*) Secretario General del Tribunal Constitucional

Magistrados Ernesto Álvarez Miranda y Oscar Urviola Hani juramentaron como presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional

En el marco de la ceremonia de apertura del año jurisdiccional de la institución, los magistrados Ernesto Álvarez Miranda y Oscar Urviola Hani, juramentaron el miércoles 11 de enero como presidente y vicepresidente, respectivamente, del Tribunal Constitucional. La ceremonia se realizó en la sede del Jirón Ancash N° 390 a las 11 de la mañana.

El acto se inició con la lectura del acuerdo de la sesión del Pleno del 6 de enero del 2012, mediante el cual se designa a las nuevas autoridades del máximo órgano de justicia constitucional, a cargo del secretario general doctor Francisco Morales Saravia.

Posteriormente se procedió con la ceremonia de juramentación del magistrado Ernesto Álvarez como nuevo presidente del Tribunal Constitucional a cargo del doctor Juan Vergara Gotelli. A acto seguido, el magistrado Oscar Urviola Hani prestó juramento como vicepresidente, la misma que estuvo a cargo del titular del TC.

Durante su discurso el doctor Álvarez Miranda anunció un trabajo descentralizado con tres macro regiones, una de ellas es la del sur con su sede principal en Arequipa donde verán los procesos de inconstitucionalidad y los procesos de tutela de derechos fundamentales generados en las cortes superiores de las regiones. Asimismo, la Macro Región Centro Oriente en la sede operativa de Lima y la Macro Región Norte en la ciudad de



Trujillo, en próximo convenio con una institución de educación superior.

"Es indispensable aumentar los niveles de predictibilidad y de especialidad. Para ello, y desde el primer día, nuestra primera decisión ha sido el ubicar al cuerpo de asesores de este Tribunal en el verdadero sitial que le corresponde, valorando el rol fundamental que ejercen en los procesos de decisión jurisdiccional, en virtud de su conocimiento e intelecto. Los asesores del Tribunal son la columna vertebral de la institución, y depositarios de los valores jurídico-constitucionales desde donde se construye la interpretación constitucional. Ellos son la continuidad histórica de la jurisprudencia, mientras que los magistrados somos los portadores temporales de un mandato intemporal destinado a la consolidación del Estado Constitucional a través de nuestros votos, última etapa de los procesos de decisión jurisdiccional", indicó Álvarez Miranda.

En ese sentido, dijo que la doctrina jurisprudencial que marcará la pauta del Colegio está determinada por nuestra preocupación por la persona humana, en los distintos ámbitos de despliegue de sus atributos y necesidades. Así, en primera línea de acción, fortaleceremos el desarrollo de la protección de los derechos indígenas, saber, consulta, propiedad comunal e identidad cultural a luz de los principios de diálogo intercultural y participación de la riqueza.

Seguidamente, se dio lectura a la nueva conformación de salones del Tribunal Constitucional, la misma que quedó de la siguiente manera: La Sala I la presidirá el vicepresidente del TC Oscar Urviola Hani y la integrarán los magistrados Juan Vergara Gotelli y Fernando Calle Hayen. La Sala 2 la presidirá el magistrado Ricardo Beaumont Calligros y la conformarán Carlos Mesa Ramírez y Gerardo Eto Cruz.

Magistrado Gerardo Eto Cruz fue distinguido como doctor honoris causa por la UNSA de Arequipa

La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa distinguió como Doctor Honoris Causa al magistrado del Tribunal Constitucional Gerardo Eto Cruz, en consideración a sus calidades académicas, profesionales y a su destacado contribución a las ciencias jurídicas en la especialidad de Derecho Constitucional.

La ceremonia se realizó el viernes 13 de enero a la una de la tarde en el Salón de Colaciones de la UNSA y estuvo presidido por el Rector Dr. Valdemar Medina Hoyos, quien en representación del Consejo Universitario otorgó tan importante distinción. Asistieron al acto el vicepresidente del TC, magistrado Oscar Urviola Hani, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, José Vicente Loza y autoridades universitarias, ediles, entre otros.

Previamente, el magistrado, dio una conferencia magistral sobre el tema, "Los tribunales



constitucionales y su aporte al derecho", la misma que fue dirigida a los abogados, estudiantes de derecho y público en general.

El doctor Gerardo Eto Cruz es abogado de profesión y tiene el grado de doctor en derecho público de las

Universidad de Santiago de Compostela, Galicia de España y es docente universitario de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Oscar Urviola, Universidad Privada Antenor Orrego, Universidad Privada del Norte y en la Academia de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Antonio Urrelo de Cajamarca, así como docente de la Academia de la Magistratura.

Es autor de múltiples publicaciones y artículos como "Derecho de las Personas", "Código Civil y Legislación Comparada", "La Justicia Militar en el Perú", "El Desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional", "La sentencia constitucional en el Perú", "Justicia Militar y Constitución en Iberoamérica", "Ciencia Política en el Perú: Perspectivas", "La herencia constitucional española en la formación del amparo en América Latina", "Estado de Emergencia y Zona de Desastre", "¿Existe Derecho a la Muerte?", "Los Derechos Difusos", etc.

Reanudan sesiones de audiencias públicas de Pleno y Salas

El Tribunal Constitucional reanudó sus sesiones de audiencias públicas de Pleno y Salas en su local de Lima dejando al voto, durante el mes de enero, 341 causas entre procesos de amparo, cumplimiento, habeas corpus y habeas data.

El Pleno del TC presidido por el magistrado Ernesto Álvarez y integrado por los magistrados Oscar Urviola (vicepresidente), Juan Vergara, Carlos Mesa, Ricardo Beaumont, Fernando Calle y Gerardo Eto, celebró dos audiencias públicas los días 17 y 25 de enero dejando al voto 63 procesos de garantías.

De igual forma la Primera Sala presidida por el magistrado Oscar Urviola e integrada por los magistrados Juan Vergara y Fernando Calle, realizó dos audiencias públicas dejando al voto 138 procesos de garantías. Estos actos procesales se realizaron los días 19 y 26 de enero.

Finalmente, la Segunda Sala presidida por el magistrado Ricardo Beaumont e integrada por los magistrados Carlos Mesa y Gerardo Eto realizó dos audiencias públicas los días 16 y 23 de enero dejando al voto 140 procesos de garantías. Estos actos procesales se realizaron en la Sala de Audiencias del TC, ubicada en Jr. Ancash N° 390, Lima.

Las audiencias públicas pueden ser vistas en vivo ingresando a la página web: www.tc.gob.pe



Magistrados del TC participan en juramentación del Colegio de Abogados de Arequipa

El vicepresidente del Tribunal Constitucional, magistrado Oscar Urviola Hani y el director general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Gerardo Eto Cruz participaron en la ceremonia de juramentación de la nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados de Arequipa (CAA) que encabeza el doctor Jorge Luis Cáceres Acevedo para el periodo 2012-2013.

El acto protocolar se realizó el viernes 13 de enero a las 6 de la tarde en las instalaciones del Centro de Convenciones del CAA, ubicado en la Av. Alfonso Ugarte N° 500 en Arequipa.

La ceremonia contó con la presencia del congresista Marco Falconi Pizarro; del presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, José Vicente Loza Zea; el Arzobispo de Arequipa, monseñor Javier del Río, entre otras importantes autoridades.



Últimas publicaciones

"La obra del Dr. Ricardo Beaumont, Comentarios al Código Procesal Constitucional y Proyecto de Reforma, contiene el análisis y comentario detallado de cada una de las normas de este Código, donde se recogen los aportes de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la doctrina nacional, a la par de los aportes del autor.

Es importante resaltar el significado de esta obra dentro de la labor académica y profesional del Dr. Ricardo Beaumont. Se trata de su primer libro referido específicamente al tratamiento de la materia procesal constitucional. Sin duda, su labor como magistrado del Tribunal Constitucional le ha permitido sumarse a sus conocimientos una nueva reflexión desde la perspectiva constitucional y procesal, que queda plasmada en este trabajo. El resultado es una obra con amplia información e interesante aporte personal que, sin duda, será de gran utilidad práctica para su utilización por abogados, magistrados judiciales y estudiantes de Derecho."

Del Prólogo del
Dr. Francisco J. Egúsquiza Pradel
Ex-Ministro de Justicia

